

Santiago, veinte de marzo de dos mil veintitrés.

Visto:

En estos autos RIT N° O-7513-2020, RUC N° 2040309119-8, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, por sentencia de siete de marzo dos mil veintidós, el juez de dicho tribunal don Álvaro Flores Monardes, acogió la demanda interpuesta por Catherina Angélica Tagle Díaz en contra de Latam Airlines Group S.A., sólo en cuanto declaró que el despido de la actora de 3 de julio de 2020 es nulo, por lo que condena a la demandada al pago de las prestaciones que refiere, sin costas.

Contra ese fallo la parte demandante dedujo recurso de nulidad, haciendo valer el motivo de invalidación del artículo 477 del Código del Trabajo, por dictación de la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, denunciando la vulneración del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, en relación con los artículos 162 y 454 N°1 del citado código, por lo que pide acoger el recurso, invalidar la sentencia recurrida y dictar la correspondiente de reemplazo declarando que el despido de la demandante es improcedente, por no configurarse la causal de necesidades de la empresa, y condenar a la demandada al pago del recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios, por la suma que indica, o la que esta Corte determine, con costas.

A su turno, la parte demandada dedujo recurso de nulidad, haciendo valer las siguientes causales, una en subsidio de la otra: i) la del artículo 477 Código del Trabajo, por dictación de la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por vulneración de los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con los incisos primero y segundo del artículo 16 del Decreto Ley N° 3.500 y; ii) la del artículo 477 del Código del Trabajo, por dictación de la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por vulneración de los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 2 y 3 de la Ley N° 17.322, por lo que pide invalidar la sentencia recurrida, declarando que nada se adeuda por



cotizaciones previsionales y por tanto, nada se adeuda tampoco por la sanción de nulidad del despido.

En subsidio, pide invalidar el fallo recurrido, declarándose que al no haber retención por los montos reclamados de cotizaciones previsionales, se rechaza la solicitud de la declaración de nulidad del despido.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de nulidad de la parte demandante:

Primero: Que la parte demandante deduce como causal de su recurso de nulidad la contemplada en el artículo 477 Código del Trabajo, por dictación de la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, alegando vulneración del artículo 161 inciso primero del Código el Trabajo, en relación con los artículos 162 y 454 N°1 del mismo cuerpo legal, al haber prescindido de un requisito previsto en la ley para configurar la causal necesidades de la empresa, dado que de la lectura de la carta de despido y de la sentencia impugnada, se puede constatar que el juez a quo dio por acreditado todos los hechos contenidos en la carta de despido que conciernen a la causal de necesidades de la empresa; sin embargo, en dicha carta no se menciona de modo alguno por qué las condiciones que se exponen se relacionan directamente con la actora, omitiéndose así toda referencia a la condición particular de la trabajadora, al punto que ni siquiera se señala la necesidad de eliminar su cargo, por lo que debió haber declarado injustificado el despido. El despido de la actora resulta una “*mera conveniencia*”, y no una “*necesidad*”, pues sólo se acreditó las condiciones económicas descritas en el fallo, señalando que la causal de necesidades de la empresa no depende de la voluntad del empleador, sino de la concurrencia de las situaciones mencionadas en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo u otras análogas, con un trasfondo de carácter técnico o de orden económico, que hagan necesaria la salida del trabajador, en definitiva importa que no se verifiquen los requisitos legales para su configuración.

Respecto a que la situación objetiva que afecte a la empresa, sea grave y “permanente”, es decir, que ponga en peligro la subsistencia de



ella, estima no se estableció como hecho de la causa que tengan éste carácter, por lo que se debió haber declarado injustificada la desvinculación.

Finalmente sostiene que si el tribunal hubiese aplicado correctamente el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, en su correcto sentido y alcance, habría establecido que para que se configure la causal de “*necesidades de la empresa*” se requiere la concurrencia de condiciones de carácter económico, objetivas, externas a la voluntad del empleador y de carácter permanente, que hagan necesaria la desvinculación de trabajadores, como asimismo que se acredite el nexo causal entre dichas condiciones y el caso específico del trabajador que es despedido, lo cual no se verifica en el presente juicio, y que baja en la productividad no es sinónimo de menor servicio prestado, por lo que el despido por necesidades de la empresa debió ser declarado improcedente.

Segundo: Que como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

Tercero: Que desde este punto de vista lo que se hace a través de la infracción de ley como causal de nulidad, es la confrontación de la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone fidelidad a los hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de examinar es si las conclusiones fácticas encuadran en el supuesto legal respectivo. En definitiva, para poder examinar el juzgamiento jurídico del caso resulta menester que los hechos a partir de los que se estructura la impugnación se encuentren fijados en la sentencia- los que son inamovibles- pues solo de cumplirse tal exigencia se podrá generar el debate sobre la infracción de ley que se denuncia.

Cuarto: Que, en el presente caso, el recurso de la parte demandante no cumple las exigencias apuntadas, desde el momento en que más que estarse a los hechos fijados en la sentencia, alega contra su



establecimiento, estimando que la sentencia debió haber tenido por acreditada la causal necesidades de la empresa, lo que la sentencia descartó, luego de señalar los antecedentes probatorios tenidos en vista y entregado los fundamentos jurídicos y doctrinales que consideró para estimar que el despido fue justificado, independiente que esas razones no las comparta al recurrente.

Quinto: Que, en consecuencia, atendido los hechos asentados en la sentencia, no se visualiza que exista infracción al artículo 161 inciso primero del Código el Trabajo, norma que opera sobre la base de un sustrato fáctico no establecido, ni consecuentemente tampoco resultan vulnerados os artículos 162 y 454 N°1 del mismo cuerpo legal, se rechazará el recurso de nulidad de la parte demandante.

II.- En cuanto al recurso de nulidad de la parte demandada:

Sexto: Que, por su parte, la parte demandada hace valer como primera causal de su recurso de nulidad la contenida en el artículo 477 del Código Laboral, en su vertiente de infracción de ley, por vulneración de los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con los incisos primero y segundo del artículo 16 del Decreto Ley N° 3.500, explicando que en la sentencia se rechazaron todos los conceptos demandados (despido injustificado, devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía de la actora y devolución de descuento “préstamos largo plazo”), sin embargo, condenó a la demandada a la sanción establecida en el artículo 162 incisos 5° y 7° del Código del Trabajo, al considerar que se habría verificado una sub cotización en el mes de enero de 2019, por la suma de \$ 1.165.021. El sentenciador tuvo por acreditado que en el mes de enero de 2019 la demandada pagó una cotización teniendo como base \$1.019.394.-, pues la actora aquel mes sólo trabajó 14 días, estando bajo el tope legal de cotizaciones para el referido período de tiempo. Sin embargo, el juez consideró que las cotizaciones debieron haberse pagado hasta el tope total, íntegramente éste, como si la demandante hubiera trabajado la totalidad de aquel mes, cuestión que estima no corresponde, dado que los topes legales imponibles contemplados en el artículo 16 del Decreto Ley N° 3500 no fueron aplicados por el sentenciador, sino que sólo se tuvo en cuenta la totalidad del mes de enero para su cálculo, sin considerar que la actora



no trabajó todo ese mes, sino que sólo 14 días, por lo cual la cotización que debe enterar la demandada de aquel mes solo debe considerar los días efectivamente trabajados.

Finalmente sostiene que de haber aplicado correctamente la ley no debió haber condenado a la demandada a la sanción de la nulidad del despido, pues lo enterado por cotizaciones previsionales es lo que corresponde de acuerdo con la legislación.

Séptimo: Que, al igual que en caso del recurso anterior, la parte demandante tampoco respeta los hechos asentados en la sentencia, la que estableció en el considerando 21° la existencia de *“una deuda previsional acotada, pero efectiva al sub cotizar la empleadora respecto de la remuneración de ese mes, que devengando una remuneración superior el límite imponible, debió ajustarse íntegramente al mismo. La base imponible sobre la que no se practica cotización es \$ 1.165.021. La sanción de los incisos quinto y séptimo, del artículo 162 del Código del Trabajo se satisface”*. En consecuencia, al asentar la sentencia la existencia de una deuda previsional –que el recurrente controvierte, sobre la base que debió haberse considerado una remuneración diferente-, se dan los supuestos fácticos para acoger la petición de nulidad del despido.

Octavo: Que, en consecuencia, al haber establecido la sentencia, circunstancias fácticas que permitieron al tribunal *a quo* aplicar las normas que regulan la sanción de nulidad del despido, al enterar íntegramente el empleador las cotizaciones previsionales del trabajador, no existe infracción de ley que influya en lo dispositivo de la sentencia, por lo que se rechazará la causal de nulidad.

Noveno: Que en subsidio del motivo de nulidad antes desarrollado, la demandada hace valer la causal del artículo 477 del Estatuto Laboral, en su vertiente de infracción de ley, en este caso denunciando la transgresión a los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo en relación, esta vez, respecto de los artículos 2 y 3 de la ley 17.322, alegando que se comete un error al condenar a su parte a la nulidad del despido, pues esta institución solo está limitada a los empleadores que retienen los montos y que luego no los enteran en las instituciones previsionales correspondientes, es decir, los que hayan tenido una



conducta contumaz, y no los empleadores que, actuando de buena fe, habría, según la tesis del tribunal de la instancia, efectuado una cotización por menos de lo que correspondería en el mes de enero de 2019, añadiendo que para el caso de autos se está frente a un solo mes en todos los años de relación laboral, mes en el cual, si se verificó una cotización previsional, pero que, de acuerdo a la tesis de la sentencia, habría una sub cotización, lo que sería solo por el mal cálculo de las cotizaciones, atendida la licencia médica presentada por la actora, y nada más, entendiendo que no puede condenarse a su parte a una sanción tan gravosa, solo por el hecho de un supuesto error de cálculo, producido en un solo mes durante toda la relación laboral, sin siquiera haber retenido los montos que la contraria alega.

Previa cita de jurisprudencia en la que apoya su postura, manifiesta que el sentenciador ha infringido las normas antes anotadas, esto debido a que la ha extendido a supuestos no contemplados en la norma, haciendo aplicable la sanción de la nulidad del despido a una situación en la cual no correspondía aplicarla, y esto ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que, de haber aplicado correctamente la norma, el sentenciador debería necesariamente haber rechazado la solicitud de nulidad del despido.

Décimo: Que, respecto a esta alegación, esta Corte comparte lo que señala la sentencia en el considerando 22°, que *“La exégesis que invoca subsidiariamente en su defensa la parte demandada, según la cual no habría habido en rigor retención de cotizaciones y, por lo mismo, no se cumpliría la tipicidad de la norma, no aparece contemplada en la regla, la que se refiere expresamente a la obligación de integrar las cotizaciones de seguridad social; lo que supone la solución íntegra respecto de la remuneración imponible devengada en el período; norma que debe ser comprendida en armonía con aquella que refuerza la responsabilidad patrimonial del empleador, cuando ha sido éste el que no ha efectuado la debida retención, contenida en el inciso segundo del artículo tercero de la ley 17.322, en relación con el número 1, del artículo 2 de la misma ley; norma esta última que al determinar las facultades del jefe de servicio, gerente general o director nacional de la respectiva institución de seguridad social, alude a “las cotizaciones adeudadas por*



los empleadores y que no hubieren sido enteradas oportunamente, incluyendo las que se descontaron o debieron descontar de las remuneraciones de los trabajadores”.

Undécimo: Que, si bien demandada no descontó de las remuneraciones de la trabajadora las cotizaciones previsionales, pero como lo señala la sentencia, se encontraba obligada a pagarlas de conformidad a la ley, estableciéndose que se adeudaban cotizaciones previsionales a la fecha del despido y con posterioridad al mismo, señalando a este respecto que *“No hay constancia de solución ulterior, comoquiera que la demandada se ha asilado en su tesis jurídica, principal y subsidiaria, en relación con lo que estima es la corrección del pago”*, se rechazará el recurso de nulidad de la parte demandada.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, **se rechazan, sin costas**, los recursos de nulidad deducidos por la parte demandante y demandada, en contra de la sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la que no es nula.

Redacción del Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena Carrillo.

No firma el Fiscal Judicial señor Norambuena, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Regístrese y comuníquese.

N° 921-2022.



Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Mireya Eugenia Lopez M. Santiago, veinte de marzo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinte de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

